

ENTREVISTA A CELESTINO CORBACHO

"Ha llegado el momento de que las comunidades autónomas tomen el relevo de la protección social"

BELÉN CARREÑO / FERNANDO SAIZ

PÚBLICO - 18/01/2010

El peor año de desempleo de la historia no ha doblegado la voluntad del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho (Valverde de Leganés, Badajoz, 1949), un alcalde que llegó al Gobierno para pilotar el cambio en el área de Inmigración y que ha terminado siendo el ministro con la cartera más vapuleada por la crisis. Tiene ya dos rupturas del Diálogo Social a sus espaldas, pero confía en que el proceso que ahora se inicia acabe en acuerdo. La virulencia de la crisis le ha hecho matizar algunas posturas, como la necesidad de terminar con las prejubilaciones.

Hace un año dijo que ser ministro de Trabajo no era el peor oficio del mundo, pero sí un gran reto. ¿Cuál es su opinión ahora?

No soy de los que tiran la toalla, y probablemente tenga más predisposición a dejar de ser ministro cuando las cosas vayan bien y no ahora, que creo que hay que estar ahí. Lo que sí he sentido en lo personal es la impotencia de estar en una situación en la que pones toda la voluntad, todas las energías, pero los elementos a los que tienes que hacer frente son tantos y tan diversos que a veces no acabas de ver el dato positivo.

Durante este año, el ministerio ha tomado medidas para paliar el paro. ¿Queda algo en el arsenal?

El paro es un huracán que llega con fuerza y las primeras medidas son de contención, y en este sentido hay que enmarcar las medidas de estímulo de la economía. Cuando ya hemos pasado el periodo más duro, es el momento de tomar medidas en una doble dirección. Por un lado, hay que mantener políticas de estímulo pero, paralelamente, hay que abordar reformas. Porque habrá un antes y un después de la crisis, y nos tenemos que preparar no para frenar la destrucción de empleo, sino para pensar cómo vamos a abordar el patrón de crecimiento.

Hay muchos parados que siguen sin tener protección. ¿Hay algo pensado para ellos?

La red de protección social en España es amplia. La protección familiar es un cojín importante. Y estamos en el mayor nivel de cobertura de prestación por desempleo de la historia. Además, hemos extendido esta red con la ayuda de los 421 euros, que beneficiará según nuestros cálculos a 400.000 personas. Puede que esa ayuda sea insuficiente para atender las necesidades de la vida, pero por debajo no queda nadie. La desprotección total en este país no existe. ¿Tiene el Gobierno pensado extender el sistema de protección social desde un punto de vista pasivo? La respuesta es no. Por una razón: el reto de futuro son las políticas activas; es decir, formación y orientación a la gente para que encuentre empleo. Creo en la red de protección social, pero no estoy de acuerdo con las políticas pasivas porque sí. En la medida que progresivamente vayamos saliendo de la crisis, el objetivo debería ser que los recursos disponibles vayan directamente a políticas sociales activas.

Usted ha pedido la ayuda de las autonomías en la protección social. ¿Han respondido?

Ahora vamos a encontrarnos en una situación en la que creo que será necesaria una respuesta de las comunidades autónomas. Establecimos la ayuda de 421 euros para un periodo de seis meses y en febrero habrá personas que hayan agotado el derecho a percibirlos y que no habrán vuelto al mercado laboral. El relevo lo tienen que tomar las comunidades autónomas.

¿Y están en disposición de hacerlo?

No lo sé, pero es su responsabilidad.

¿Tiene contactos con ellas para pensar que esto va a ser así?

He tenido contactos y sé que hay comunidades que han hecho esfuerzos pero tenemos que hablar con claridad. La renta del Estado les ha quitado mucha presión a las autonomías, que durante este tiempo no han movido su posición en cuanto a facilitar las rentas de inserción y ahora tienen que hacer frente a su responsabilidad.

¿Han hecho la labor que les tocaba en el programa con los itinerarios laborales?

Quiero esperar a las conclusiones finales, pero tengo la percepción de que los resultados han sido desiguales.

El miércoles se reinicia el Diálogo Social. ¿Cuáles son las expectativas?

Lo importante es que no es un proceso sustitutivo de la negociación colectiva entre sindicatos y empresarios que ya está en marcha. Creemos que esa negociación tiene que seguir, porque lo que se dirime

en ella tiene mucha importancia de cara a las futuras reformas. El miércoles vamos a dotarnos de una agenda de trabajo que nos permita poder reiniciar el Diálogo Social. El Gobierno quiere ir con una visión global de lo que puede ser el conjunto de las reformas. Pretendemos que sea un diálogo permanente.

Un objetivo del Gobierno es reducir la temporalidad, ¿cuál es la estrategia?

Es un objetivo en el que parece que hay plena coincidencia.

En el fin, sí, pero no en los medios.

Pero en el objetivo estamos todos de acuerdo. ¿Hay excesiva temporalidad? Sí. ¿Sería bueno reducirlo? Sí. ¿Cómo? Vamos a discutirlo. El Gobierno tendrá opinión pero a priori entendemos que es una materia donde deben explorarse todas las visiones y una materia sobre la que hay que reflexionar profundamente.

¿Habrán líneas rojas?

No me gusta hablar de líneas rojas, pero en el Gobierno no estamos de acuerdo en abaratar o flexibilizar el despido. Porque en España el despido es libre. Somos muy dados a decir lo que pasa fuera, que en Europa hay países en los que el despido es más barato, pero no te dicen lo difícil que es despedir. En España, se rescinde el contrato, te indemnizan y ya está. Tampoco estamos dispuestos a discutir una rebaja de las cuotas de la Seguridad Social sin tener en cuenta cómo va a afectar a las pensiones. A partir de ahí, todos tendremos que hacer el esfuerzo por buscar puntos de encuentro, dejar cosas en el camino y buscar la síntesis, que no es la satisfacción al 100% de todas las partes.

¿Y qué pasó con la oferta del Gobierno de bajar las cuotas medio punto?

La Seguridad Social tiene una buena situación económica pero tenemos que ser cuidadosos para mantener la sostenibilidad porque, además, la crisis va a ampliar el número de pensionistas. Esto coincide con el final del periodo de las comparecencias del Pacto de Toledo, por lo que entendemos que cualquier discusión que tenga que ver con las pensiones sería buena hacerla en este marco, no al margen. La propuesta que hizo el Gobierno entendía que no afectaba a la sostenibilidad, pero los cálculos se hicieron en aquel momento y, con los datos que tenemos ahora, parece razonable que lo hagamos en una doble mesa, la del Diálogo Social pero también en el Pacto de Toledo.

Así que el medio punto no estará sobre la mesa.

No.

¿El ministerio es partidario de ampliar el periodo de cálculo para las pensiones?

Ese tema estará presente en el Pacto de Toledo. Lo que no juzgamos en estos momentos es el resultado final de la posible discusión. Pero, previamente a eso, hay que orientar las reformas de la Seguridad Social. El efecto del cálculo actual de 15 años en algunos casos puede ser positivo pero también tiene sus partes negativas. Como tengas la desgracia de perder el empleo con 57 años, el resultado final de la cuantía de tu pensión será doloroso.

¿Se tomarán más medidas contra las prejubilaciones?

En un momento de crisis como la actual, es muy difícil prohibir la jubilación anticipada como posibilidad para resolver los ajustes, porque

siempre será menos negativo que el despido en una persona que tenga una vida laboral por delante. Así que ahora mismo difícilmente vamos a conseguir que las prejubilaciones se extingan. Pero fuera de la crisis, hay que acabar con la cultura de prejubilación a partir de los 52 años. Las recomendaciones de futuro no serán bajar la edad de jubilación sino acercarla a la edad legal de 65 años. Hay que explorar cómo incentivar a aquellas personas que, cumpliendo la edad legal de jubilación, siguen queriendo mantenerse en la vida activa, ya que hay colectivos muy amplios en los que a los 65 años se está en el culmen de la sabiduría.

¿Cuánto tiempo lleva el ministro cotizando a la Seguridad Social? ¿No quiere jubilarse como el resto de los españoles?

Empecé a cotizar en 1964, pero en total tendré cuarenta años trabajados. Yo aspiro a estar el máximo tiempo posible activo. Es evidente que depende de las actividades que se realicen. Es diferente estar en un andamio que en una oficina.

En la negociación del Diálogo Social, hay un potencial elemento distorsionador, que es que el presidente de la patronal deje de serlo. ¿Afectaría esto al proceso?

El Gobierno tiene que entenderse con sus interlocutores formales, que son las organizaciones empresariales y sindicales. Desde ese punto de vista, las relaciones del Gobierno son con las organizaciones y son estas las que ponen a sus representantes. Cualquier acuerdo al que lleguemos será con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO.

Una reciente encuesta señala que los españoles no se fían ni del Gobierno ni de la oposición para resolver la crisis. ¿No es un fracaso de la clase política?

Cuando se produce una crisis tan profunda como la actual, es razonable que los ciudadanos acaben imputando a quien tiene responsabilidad de gobierno. Eso pasa en España y en otros países. Pero si yo fuese del PP, estaría preocupado si los ciudadanos no me creen una alternativa creíble.

Los datos sobre la economía sumergida han provocado un cruce de declaraciones entre los ministerios de Trabajo y Economía. ¿Se puede estimar el porcentaje del PIB que está oculto?

Lo primero que debo decir es que no hay ninguna polémica con Economía. Mi relación con la vicepresidenta Elena Salgado es de compenetración absoluta. Es cierto que hay estimaciones sobre la economía sumergida, que se corresponden a estudios elaborados por instituciones internacionales y que, obviamente, no son datos oficiales, como ya dije en su día, porque lo que está sumergido no aflora. Pero en este debate hay que constatar dos hechos. Por un lado, que en España han convivido tradicionalmente la economía legal con la irregular. Por otra parte, sabemos que en épocas de crisis la economía oculta tiende a incrementarse por razones obvias. Nuestro mensaje es que trabajar contra la actividad irregular debe ser una constante, porque esta produce un retroceso en los derechos de los trabajadores y en la economía. Por eso hemos incrementado cuantitativa y cualitativamente las inspecciones contra la economía sumergida.